

De rústicas revueltas.

Bartra, Armando.

Cita:

Bartra, Armando (2003). *De rústicas revueltas*. *Observatorio Social de América Latina (OSALA)*, IV (3), 185-196.

Dirección estable: <https://www.aacademica.org/armando.bartra/61>

ARK: <https://n2t.net/ark:/13683/pCd2/SDh>



Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons.
Para ver una copia de esta licencia, visite
<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es>.

Acta Académica es un proyecto académico sin fines de lucro enmarcado en la iniciativa de acceso abierto. Acta Académica fue creado para facilitar a investigadores de todo el mundo el compartir su producción académica. Para crear un perfil gratuitamente o acceder a otros trabajos visite: <https://www.aacademica.org>.

Región Norte

De rústicas revueltas

Armando Bartra*

* *Director del Instituto de Estudios para el Desarrollo Rural Maya A.C. Miembro del Comité Editorial de la revista Chiapas.*

Invierno caliente

Cuando menos lo esperábamos nos echaron montón. Los daban por muertos, pero el último viernes de enero los rústicos se saltaron las trancas y en número de cien mil tomaron el centro de la capital. Venían de todos los rumbos: desde el sur profundo del “vos” y el Comiteco, hasta el norte en vilo del “usted” y el Sotol, pasando por el tuteo pulquero del altiplano. En la marcha se entrecruzaban la queda sutileza maya, la alzada prestancia zapoteca y el sobrado cosmopolitismo nahuatl con la ruda franqueza hispano-chichimeca de los hombres del norte y el bullanguero desparpajo africano de los costañeros. La fiesta campirana de enero documentó la prodigiosa diversidad fisonómica, lingüística y de indumentaria de los labriegos, al tiempo que testimoniaba su cólera unánime. Fue la airada protesta del mundo rural, primer damnificado del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y víctima propiciatoria de nuestro presunto ingreso al primer mundo.

La mayoría había viajado varios días desde su ranchería o paraje: cientos o miles de kilómetros en ruta para trotar por cinco horas al grito de "¡El campo no aguanta más!". Y en verdad el agro tocó fondo: murmuran las mazorcas del maíz, conspira la erizada nopalera, las huertas remontadas se amotinan. Se secó la paciencia de la patria profunda.

En los últimos dos años arreciaron las muestras de hartazgo rural: protestas de maiceros y frijoleros golpeados por la entrada de granos estadounidenses a precios de *dumping*, de cañeros a quienes los industriales del azúcar no pagan la materia prima alegando que el dulce no tiene precio porque Estados Unidos no compra lo prometido y por la competencia de la fructosa elaborada con maíz amarillo de importación, de piñeros arruinados por la entrada al país de fruta en lata más barata que la fresca, de cafetaleros bocabajeados por las ínfimas cotizaciones del aromático en la bolsa de Nueva York. Pero a fines de 2002 tres chispas sincronizadas incendiaron la pradera: el 1ro de enero del año siguiente se desgravarían casi todas las importaciones agroalimentarias de los países del TLCAN, al tiempo que Estados Unidos promulgaba una nueva Ley Agrícola que incrementa en alrededor de 80% sus subsidios al campo y el presidente Fox mandaba al legislativo para su aprobación un presupuesto agropecuario 2003 inferior en 7%, en términos reales, al de 2002.

Y ante la triple amenaza, los que iban cada quién para su santo se percataron de que desbalagados marchaban al despeñadero, y optaron por hermanarse en torno a una plataforma común, *Seis propuestas para la salvación y revalorización del campo mexicano*, cuyo corazón es la moratoria al capítulo agropecuario del TLCAN y una nueva política rural, pero que también demanda más presupuesto para el campo, adecuado financiamiento, seguridad e inocuidad alimentarias y reconocimiento de los derechos de los pueblos indios.

De arranque se suman doce agrupaciones, entre coordinadoras nacionales multifrentistas, organizaciones regio-

"Y todos eran pobres: unos pobres viejos y otros nuevos pobres, pero todos arruinados por un sistema excluyente y emparejador que acabó con las ilusiones de la enorme mayoría de los campesinos medios; de los llamados "transicionales", que en verdad transitaron, pero a las filas de la miseria rural."

nales y convergencias sectoriales de cafetaleros, cerealeros, silvicultores y organismos de crédito popular. El 2 de diciembre, bajo el lema *El campo no aguanta más*, inician movilizaciones a las que se incorporan de inmediato otras dos organizaciones, entre ellas una de deudores llamada El Barzón. Ese mismo día se realiza un mitin, y al siguiente tres mil campesinos exponen sus propuestas en el Palacio Legislativo, donde dejan un simbólico corral con veinte vacas. De ahí se encaminan a la Embajada de los Estados Unidos, país cuyas políticas comerciales causan mortandad rural. Una semana después miles marchan de nuevo por calles de la capital, y al atardecer los jinetes de El Barzón irrumpen al galope en las instalaciones del Palacio Legislativo. Simbólica carga que fue en realidad innecesaria, pues ocho días antes los diputados se habían mostrado bien dispuestos ante sus demandas, y la incipiente convergencia tenía fuerza sobrada para abrirse paso en la agenda nacional.

Las jornadas de diciembre logran que los diputados incrementen en más de trece mil millones de pesos el mermado presupuesto agropecuario propuesto por Fox, y consiguen acuerdos para reducir los costos del combustible y la energía eléctrica empleados en el campo. En cambio, los senadores, a quienes incumbe la política exterior, que ante el requerimiento de los campesinos habían acordado demandar al Poder Ejecutivo la revisión del capítulo agropecuario del TLCAN, reculan a la postre cediendo a las presiones combinadas de los enviados de la presidencia y los personeros del gobierno estadounidense.

Así las cosas, la demanda central sigue en vilo, y el 2003 empieza a tambor batiente: el 1ro de enero veinte mil indígenas zapatistas reivindican en Chiapas la vigencia de su causa proclamada nueve años antes, mientras que en el otro extremo de nuestra geografía, en Chihuahua, dirigentes del movimiento que ya se llama *Movimiento el campo no aguanta más* (MCAM) inauguran la campaña *Salvemos al campo para salvar a México* cerrando simbólicamente el puente internacional de Ciudad Juárez, por donde entran importaciones ruinosas. Días después, dirigentes y militantes inician una huelga de hambre en el Ángel de la Independencia de la ciudad de México, parte de una intensa campaña de información.

La fuerza de las acciones hace que desde diciembre el Congreso Agrario Permanente (CAP), una devaluada coordinación paragubernamental inducida en 1989 por el entonces presidente Carlos Salinas, trate de montarse en el movimiento. Y lo mismo la Confederación Nacional Campesina (CNC), pilar agrario de la revolución hecha gobierno, de capa caída desde que el PAN le ganara al PRI la presidencia de la República.

El 6 de enero, al iniciarse el diálogo con el gobierno, el MCAM entra en terreno minado. El jefe del Ejecutivo y sus secretarios de Estado ofrecen promesas vacuas y morralla pre-

supuestal, emprenden campañas mediáticas para engatusar a la opinión pública y tratan de quebrar la incipiente alianza campesina, mientras del lado gremial la CNC intenta negociaciones bilaterales y la fracción priísta del CAP oferta con descuento sus devaluados servicios de esquirol. Pero los tiempos han cambiado: el nuevo gobierno no dispone como los anteriores de solícitas clientelas rurales, el corporativismo aún no logra acomodarse a las nuevas circunstancias, y esta vez los campesinos están de veras enojados. Con todo, para fines de enero el proceso se empantana, pues una unilateral y estrecha propuesta gubernamental de diálogo amenaza con hacer un desangelado parto de los montes del promisorio movimiento.

Para destrabarlo, el MCAM llama a una gran marcha al Zócalo capitalino el 31 de enero, cuya convocatoria testimonia la compleja coyuntura mexicana: en primer lugar firma el MCAM, seguido por El Barzón y el CAP. Sin embargo, también figuran dos grandes convergencias obreras: la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), donde se alinea el poderoso Sindicato de Telefonistas, y el Frente Sindical Mexicano (FSM), animado por el combativo Sindicato Mexicano de Electricistas (SME). Sintomáticamente, la decadente pero aún poderosa CNC no firma el llamado, alegando que no hace falta marchar pues ya hay acuerdo con el gobierno para conversar. En realidad, la CNC, acostumbrada a la negociación en corto y el chantaje político, se resiste a entrar en el terreno societario del MCAM. Pero todo anuncia una gran asistencia, y a última hora la CNC tiene que sumarse para no perder figura e interlocución.

Con sus cien mil participantes, que emplean cinco horas en entrar todos al Zócalo, la marcha fue la mayor movilización campesina de la posrevolución. Protagonizada por los nutridos contingentes de la veintena de grandes organizaciones convocantes, contó también con las módicas pero entusiastas representaciones de centenares de agrupaciones estatales, regionales y locales. Había productores comerciales y autoconsuntivos; exportadores y de mercado interno; trabajadores del surco, de la huerta y del bosque; organizaciones de crédito popular y deudores organizados; indios y mestizos; hombres y mujeres. Y todos eran pobres: unos pobres viejos y otros nuevos pobres, pero todos arruinados por un sistema excluyente y emparejador que acabó con las ilusiones de la enorme mayoría de los campesinos medios; de los llamados "transicionales", que en verdad transitaron, pero a las filas de la miseria rural. El inicuo capítulo agropecuario del TLCAN dotaba de rostro al enemigo, pero los agravios de los marchantes remitían a la política agraria y agrícola, al estragado sistema rural en su conjunto y en última instancia al orden social marginante y empobrecedor que a todos atosiga.

La jornada del 31 es el punto más alto de las jornadas rurales iniciadas dos meses antes. En sesenta días los campesinos pasan del archivo muerto de la historia al horario AAA de las televisoras y al centro de la agenda nacional. Pero no sólo ganan la batalla de la opi-

nión pública. También obligan al gobierno rejego a negociar con seriedad, construyendo una inusitada convergencia donde sólo falta el movimiento autonomista indígena, que desgastado por sus infructuosas campañas para reformar la Constitución declina por el momento iniciar junto con los campesinos una nueva lucha con el mismo objetivo.

En febrero arranca la segunda etapa del movimiento, cuyo hilo conductor son ocho mesas de trabajo públicas y sucesivas donde representantes de las organizaciones campesinas, del gobierno federal, y expertos, abordan cuestiones comerciales, presupuestales, financieras, sociales, agrarias, medioambientales, legislativas y de gobernabilidad, y englobándolo todo debaten sobre el papel del campo en el proyecto de nación. Las mesas sirven para que las organizaciones sistematicen más sus propuestas y mantienen el tema rural en los medios de comunicación, pero no avanzan en la construcción de consensos, pues los secretarios de estado se limitan a discursar, evadir el debate y escapar al linchamiento. Además son anti-climáticas y desgastantes para los campesinos, quienes en dos semanas pierden el impulso y el ritmo que les habían dado las movilizaciones.

Pero aún en esta pastosa etapa hay dos logros notables: el 27 de marzo, el MCAM, la UNT, el CAP, El Barzón y otras fuerzas constituyen una inédita convergencia obrero-campesina, el "Frente sindical-campesino y social para impulsar la soberanía alimentaria, el empleo, la vida digna y el desarrollo sustentable"; y en el mismo lapso el MCAM, la CNC, el CAP y El Barzón consensúan una propuesta común de Acuerdo Nacional para el Campo, plausible no sólo por su contenido sino porque días antes una plataforma compartida por las organizaciones campesinas independientes y la ex oficialista CNC hubiera parecido cosa de locos. Robustecen igualmente al movimiento las tomas de posición favorables de la iglesia católica, el Partido de la Revolución Democrática (PRD), algunos legisladores, y los mandatarios estatales agrupados en la Conferencia Nacional de Gobernadores.

El movimiento entra al *spring* final fuera de ritmo y con mermadas energías. Sin embargo, en tres meses de desgastante activismo acumuló fuerzas y respaldos que le darán alguna ventaja a la hora de negociar en corto los términos del Pacto Nacional para el Campo. La ponencia del MCAM a la Mesa sobre asuntos comerciales lo resume bien: "2,2 millones de mexicanos se pronunciaron a favor (de renegociar el capítulo agropecuario del TLCAN) en la Consulta sobre Prioridades Nacionales realizada el pasado 19 y 20 de noviembre. Cien mil votos a mano alzada se pronunciaron por la renegociación del TLC en la histórica marcha campesina del 31 de enero. La totalidad de las auténticas organizaciones campesinas y de productores agropecuarios y forestales del país hoy se encuentran unificadas por primera vez en torno a esta demanda central. 82% de los mexicanos opina que el gobierno... debe buscar la renegociación del apartado agropecuario del TLC, de acuerdo con la encuesta de GEA-ISA... de febrero pasado".

Pero el de Fox es un gobierno de derecha que compró íntegro y copeteado el proyecto neoliberal, de modo que la negociación es cuesta arriba: el secretario de la Gobernación actúa de "policía bueno", pues son inminentes las elecciones para renovar la diputación federal y le urge un acuerdo lucido, mientras que los de Economía y Agricultura se desempeñan como los golpeadores y fanáticos del libre mercado que son. En auxilio de los negociadores campesinos llega el aniversario de la muerte de Emiliano Zapata, y el 10 de abril el Frente Sindical Campesino y Social realiza una marcha capitalina con unos veinticinco mil manifestantes, en su mayoría obreros: telefonistas, tranviarios, trabajadores universitarios, del Seguro Social y del Monte de Piedad y pilotos aviadores, acción que esta vez tiene réplicas en los diferentes estados de la República dado que desplazarse masivamente al DF es algo que los campesinos no pueden hacer todos los días. Así, decenas de miles marchan en Oaxaca, Hidalgo, Puebla, Chihuahua, Chiapas y otros estados. Al mismo tiempo los telefonistas realizan un paro nacional solidario, y el discurso de su sempiterno líder, Hernández Juárez, expresa con claridad el sentido de la convergencia entre trabajadores urbanos y rurales: "Si la sociedad no se moviliza y no está dispuesta a presionar a este gobierno, cosas peores pueden ocurrir para el sector laboral... ¡Viva la unidad obrera y campesina!"

Menos de una semana después, la comisión redactora campesino-gubernamental arriba a un documento de consenso para el Acuerdo Nacional; texto profuso, confuso y difuso, que el presidente de la República deberá firmar el 28 de abril, pero que previamente las organizaciones llevan a consulta de sus bases. Como era de suponer, CNC lo aprueba de buen grado, mientras que el CAP y El Barzón lo ven apenas como un punto de partida, pero signan; en cuanto a las doce organizaciones del MCAM, ocho firman y cuatro no, pero unas y otras respetan las decisiones de las bases y coinciden en seguir luchando juntas por el programa común, pues demandas fundamentales como los derechos de los pueblos indios, la revisión del TLCAN, el artículo 27 constitucional y una verdadera política rural de estado comprometida con la soberanía alimentaria y los campesinos no están en el acuerdo.

Así, la firma del documento en Palacio Nacional resulta un acto menos lucido de lo deseado por Fox, pues mientras el presidente echa las campanas al vuelo –"estamos haciendo una reforma estructural"– los campesinos abuchean al secretario de Agricultura y sus discursos coinciden en lo "limitado" del acuerdo, anunciando nuevas movilizaciones por las demandas de fondo. Y el grito unánime: "¡Zapata vive, la lucha sigue!"

En ciento cuarenta días de intenso trajín los campesinos consiguieron lo que a los pueblos indios les ha costado una guerra que aún no termina. Lograron ser mirados, no sólo vistos de reojo como parte del paisaje, y se incorporó a los sentimientos de la nación un nuevo apotegma: *la salvación del campo es la salvación de México*. En este contexto

“En ciento cuarenta días de intenso trajín los campesinos consiguieron lo que a los pueblos indios les ha costado una guerra que aún no termina. Lograron ser mirados, no sólo vistos de reojo como parte del paisaje...”

sentaron al gobierno a negociar una agenda campesina que, al poner en cuestión el destino del agro, implícitamente pone a debate un nuevo proyecto de nación.

Periciales de un agrocidio

¿Pero quién mató al campo mexicano? Desde principios de los '80, cuando arrancan las políticas neoliberales de “ajuste estructural”, México deja de crecer en términos reales, disminuye porcentualmente el empleo en el sector formal (sólo la maquila crea nuevos puestos de trabajo), y se polariza dramáticamente el ingreso debido a mecanismos de exclusión que engrosan la pobreza extrema. Hay también intensos procesos de desindustrialización y desnacionalización del conjunto de nuestra economía. Pero el sector más dañado es la agricultura, y dentro de ella la producción de mercado interno y los campesinos llevan la peor parte.

Vamos para dos décadas con déficit en la balanza comercial agroalimentaria –salvo en 1986, 1987 y 1995, cuando hay fuertes devaluaciones de la moneda–, saldo negativo que en los nueve años del TLCAN arroja un promedio anual de 1.200 millones de dólares. Así, pasamos de ser autosuficientes y exportadores de alimentos básicos a importar el 40% de los granos y oleaginosas que consumimos. Por ello, en los últimos ocho años se han perdido un millón ochocientos mil empleos agrícolas y se disparó la migración rural: la de temporada dirigida a los campos irrigados, pero también a las ciudades y sobre todo a los Estados Unidos. En el arranque del milenio tenemos veintidós millones de compatriotas en EE.UU., de los cuales poco menos de la mitad nació en México y la mitad de esa mitad es indocumentada.

Los campesinos siempre sufrieron penurias económicas, pero hoy son miserables. Mientras que en las ciudades 84% de los mexicanos son pobres y 35% muy pobres, en el campo 98% son pobres y 81% extremadamente

pobres. Así, con un cuarto de la población total, el campo concentra cuatro quintas partes de la miseria nacional. Esto también significa que si en las ciudades los pobres no indigentes abarcan cerca de la mitad de la población, en el campo son menos del 17%, es decir que el *agrocidio* de los últimos tres lustros diezmó a las capas medias rurales.

En estas condiciones, la sobrevivencia de las familias campesinas depende cada vez menos de la producción agropecuaria comercial y cada vez más del autoconsumo, el trabajo a jornal, las remesas en dólares de los migrados y los subsidios gubernamentales. En particular, las remesas crecieron 1.300% en once años y hoy son las mayores del mundo sólo superadas por las que recibe la India. Su monto anual, de diez mil millones de dólares en 2002, únicamente lo rebasan el ingreso petrolero, el de la maquila y el de las inversiones extranjeras directas. Y dado que el valor total de las importaciones agroalimentarias mexicanas es de once millones de dólares, y la mayor parte proviene de EE.UU., a uno se le ocurre que el dinero que envían los trasterrados todos los años, todos los años lo enviamos de regreso para comprar comida; unos alimentos que si no se hubieran ido, ellos mismos estarían produciendo aquí. Se dirá que el intercambio es intrínsecamente virtuoso, que así la comida sale más barata, que allá el trabajo de los mexicanos es más productivo... Quizá, pero en la operación perdimos la soberanía alimentaria, extraviamos la soberanía laboral y se degradó severamente la convivencia en las regiones expulsoras. Para algunos, la dispareja integración con el norte sigue siendo un buen negocio. Para los campesinos, no.

Cuando empezó la negociación del TLCAN, México ya había eliminado precios de garantía y suprimido permisos de importación para la mayoría de los productos agropecuarios, de modo que para regatear sólo nos restaban ciertos subsidios agropecuarios, y en cuanto a nuestro mercado interno, la apertura a las importaciones de maíz, una de las pocas cosechas que aún se protegían con aranceles y precios de garantía. Y no era poca cosa, pues el maíz es el principal producto agrícola, tanto en México como en Estados Unidos. Pero siendo importante para ambos, la sensibilidad es muy distinta, pues mientras que para nosotros es un bien alimentario directo, generalizado y básico, para ellos es insumo forrajero e industrial.

A principios de los '90 todos los pronósticos coinciden en los impactos agropecuarios que tendría el tratado: reducción de la tasa de crecimiento de la producción agropecuaria mexicana, incremento absoluto y relativo de las importaciones agropecuarias, progresivo déficit nacional en bienes de consumo básico manifiesto en el creciente saldo rojo de la balanza alimentaria, estancamiento absoluto y contracción relativa de la producción cerealera, pérdida abrupta o paulatina de puestos de trabajo en la agricultura, aumento de la migración rural a las ciudades y a los Estados Unidos, y mayor desigualdad, polarización y concentración del ingreso rural. El propio Fondo Monetario Internacional, garganta profunda del salinismo, anunciaba en un Boletín del 10 de agos-

to de 1992 que el libre comercio con Estados Unidos significaría para nosotros el retiro del cultivo de más de diez millones de hectáreas y un éxodo rural de alrededor de quince millones de mexicanos. Así pues, el asesinato del campo mexicano fue un plan con maña; un *agrocidio* minuciosamente calculado.

Por eso, en el arranque del milenio los rústicos se rebelan. Por eso el MCAM demanda un cambio de rumbo y la “exclusión definitiva del maíz y frijol del proceso de liberalización comercial del TLC”. Y argumenta: “razones sobran: seguridad nacional, soberanía alimentaria, preservación del empleo rural... respeto a la diversidad étnica, social y cultural de la nación; contribución multifuncional de la producción maicera y frijolera y, por las asimetrías insalvables entre los sistemas de producción, financiamiento, subsidios, investigación, comercialización, transporte, etc. de México, Estados Unidos y Canadá”.

Veamos algunas de las asimetrías: con 7 veces más tierras agrícolas y una productividad por trabajador 19 veces mayor que la nuestra, el vecino del Norte es un gran exportador de sus cosechas, cuya balanza comercial agroalimentaria arroja un superávit del orden de los 12 mil millones de dólares, mientras que nosotros tenemos un déficit por el mismo concepto de 1,7 miles de millones. En el caso del maíz, los rendimientos medios estadounidenses son de 8,5 toneladas por hectárea, mientras que los nuestros son de 2,5; y si a esta productividad técnica casi cuatro veces mayor le agregamos que gracias a los subsidios ellos exportan a precios 20% por debajo de los costos de producción, no debe extrañarnos que en los años del TLCAN la cosecha maicera nacional se haya estancado en 18 millones de toneladas, mientras que importamos del Norte un promedio anual de 5 mil. Y con la nueva Ley de Seguridad e Inversión Rural estadounidense de 2002, la iniquidad se profundizará, pues supone un subsidio adicional del orden de los 250 mil millones de dólares –80% más que los previstos por la Farm Bill de 1996– destinados principalmente al arroz, algodón, trigo, cebada y maíz.

Corte de caja

El primero de enero de 1994, al entrar en operación el TLCAN, el EZLN se levantó en armas contra un tratado emblema de la injusticia que ofende a los mexicanos. Nueve años después, cuando los alzados chiapanecos se han identificado principalmente con la causa autonomista de los pueblos indios, el movimiento campesino retoma la bandera inicial: la lucha contra una globalización salvaje cuyos primeros damnificados son los indios y los pequeños agricultores.

El nuevo milenio es crucial para los campesinos: o debilitamiento rápido, irreversible y final, o acciones heroicas propias de trances extremos. Al desmantelamiento de los agraristas, de

capa caída desde los '80, se suman en los '90 la ruina, descapitalización, migración, envejecimiento, desilusión, descomposición social y erosión organizativa que aquejan a unas agrupaciones productivas cuya presunta "mayoría de edad" resultó acta de defunción.

Pero las siete plagas no acabaron del todo con los campesinos, quienes en la inminencia de la extinción han decidido vender cara su vida.

La inesperada energía que despliega un sector largamente sangrado proviene de que las diferencias de gremio, proyecto, táctica o filiación política, que por décadas separaron a los tomatierros de los productivos, a los viables de los desahuciados, a los autoconsumitivos de los mercantiles, a los del mercado interno de los exportadores, a los indios de los mestizos, a los autónomos de los políticamente afiliados, pasaron a segundo plano frente a un modelo *agrocida* que a todos vapulea. Y es que la exclusión es emparejadora, diluye las diferencias, unifica a los diversos.

La sorpresiva amplitud de las recientes jornadas se explica también porque la veinteañera promesa neoliberal de que el mercado nos haría libres, justos y democráticos resultó falaz.

Hoy están arruinados los "carentes de potencial", condenados de arranque, pero también los presuntamente "viables". Más aún, a la hora de la verdad, resultó que los más pobres, que practican el autoabastecimiento, resistieron mejor el vendaval que los puramente comerciales. Por si fuera poco, la abrupta apertura comercial devastó también a la micro, pequeña y mediana industria, y si bien los sectores transnacionalizados se beneficiaron del vuelco, el conjunto de la economía no creció. Así, la presunta entrada al "Primer Mundo" vía globalización norteaña ya no tiene credibilidad, ni en el campo ni en ninguna parte.

El desconcierto político con que arrancó el milenio también favorece al movimiento. El viejo régimen priísta ejercía un eficiente control corporativo sobre los campesinos que se diluyó con la administración de Fox, un gobierno derechista que retoma la política neoliberal del PRI pero carece de los operadores, amarres y fidelidades agrarias del viejo régimen. Así, la CNC y los priístas del CAP aún no habían logrado un acomodo satisfactorio con las debutantes autoridades agrarias, lo que propició su alianza circunstancial con el movimiento campesino. Sin duda lo que buscan los priístas es restaurar el viejo clientelismo, pero para lograrlo se han tenido que embarcar en una reforma de los paradigmas, hábitos y políticas agrarias del estado que ellos mismos ayudaron a construir. ¿Hasta cuándo?

Si por su despliegue y composición la actual lucha campesina es la más extensa e incluyente de las últimas décadas, por su contenido es el cuestionamiento social más directo y explícito que se haya dado al modelo neoliberal que inspira las políticas públicas desde hace veinte años; mentís que —bien visto— se extiende al absolutismo mercantil que inspira la globa-



© Marcelo Rodríguez

lización salvaje. Y es que los pequeños y medianos agricultores son los mayores perdedores de la globalización. Ciertamente el TLCAN no tiene toda la culpa; pero en su articulado está el epitafio de los campesinos, de modo que al confrontarse con la letra y el espíritu del tratado, el movimiento retoma la declaración de guerra al tratado comercial con que se alzarón hace nueve años los indios chiapanecos. Cuestionamiento que no se queda en asuntos de mercadeo, pues al ser abismal nuestra asimetría con el Norte, los campesinos y la agricultura de por acá no son defendibles sin apelar sus funciones sociales, ambientales y culturales; sin reivindicar la polifonía de un agro que cosecha café pero también aire, tierra y agua, que produce maíz pero

igualmente seguridad y soberanía alimentarias, que genera materias primas al tiempo que empleos, que es un sector de la producción económica pero también un reproductor de cultura, de identidad, de solidaridades. Y admitir esto es reconocer los límites infranqueables y terminales del absolutismo mercantil, un sistema desafanado de las diversidades humanas y ambientales, donde lo que no produce ganancia no tiene valor.

Algunos piensan que el espíritu de la época está en las luchas reactivas e informales que se confrontan desde fuera con el orden económico, social o político. Batallas espectaculares pero efímeras que brillan, concitan extensas solidaridades y se apagan al enfrascarse sus animadores en trajines menos vistosos. Las jornadas campesinas han sido un mentís a tal predicción. Como el movimiento indígena de los últimos años, la presente lucha es una "protesta con propuesta", como dicen sus animadores. Así como el

Congreso Nacional Indígena dispone de un elaborado planteamiento autonómico y busca su reconocimiento constitucional, las organizaciones campesinas saben bien lo que quieren y sus planteos programáticos son más consistentes, específicos y argumentados que las recetas de los neófitos burócratas agrarios que nos aquejan. Y si hasta diciembre de 2002 cada sector y cada organización tenían sus propias demandas y propuestas particulares, hoy se han articulado en un consistente programa unitario. Un planteo comprehensivo y estratégico que permitió romper con los habituales bilateralismos divisionistas y emprender una negociación multilateral con el gobierno.

Las recientes jornadas campesinas son valiosas en sí mismas, pero también porque le desbrozan el camino a la futura movilización de contingentes obreros. Fuerzas que ya se desplegaron en las acciones solidarias con los campesinos pero tienen su propia agenda clasista y nacional: en primer lugar detener la reforma patronal y corporativa a la Ley Federal del Trabajo, pergeñada por la iniciativa privada, los charros y el gobierno, al tiempo que impulsan un proyecto de ley democratizador y favorable a los asalariados; en segundo lugar, impedir la privatización silenciosa de la producción, distribución y comercialización de electricidad, que es el primer paso en la entrega del petróleo y otros energéticos al capital transnacional.

En la misma línea de ideas, las rústicas revueltas de 2003 son importantes en el tránsito de resistir las reformas anti-populares y antinacionales del "gobierno del cambio" a impulsar reformas justicieras. Hasta ahora la izquierda social y la izquierda política han logrado detener las iniciativas fiscales, energéticas, laborales y educativas de Vicente Fox. En cambio, el movimiento campesino ha conseguido también formular e impulsar su propia reforma. Una mudanza que no se impondrá de un día para otro, pero avanzará paulatinamente en tanto lo permita la correlación de fuerzas. Reforma en curso y sostenida desde abajo, que desacredita las visiones en el fondo apocalípticas de quienes creen que resistiendo y confrontando desde fuera llegaremos por arte de magia –o por cualquier otra vía– a un vuelco definitivo del sistema.

La lucha campesina ayudó a colocar en la agenda política uno de los temas identificados por la Consulta sobre Prioridades Nacionales que a fines de 2002 impulsaron diversas fuerzas políticas y sociales, y cuya importancia se ratifica ahora, ya no con el peso del voto sino con la contundencia de la movilización. Y esta agenda, sustentada en las opiniones y acciones de una sociedad organizada y participativa, le da sentido democrático y compromiso real a la participación de la izquierda en los inminentes comicios; en particular en los que definirán la composición de la cámara de diputados, pieza clave en las futuras batallas por la reforma del estado. El nuevo pacto para el campo mexicano se tendrá que empujar desde abajo, pero también desde arriba, y es importante que los campesinos amarren compromisos con diputados y senadores progresistas. Pero al mismo tiempo esto obliga a que los partidos de izquierda redefinan su función y, en vez de ver como fines en sí mismos el triunfo en los comicios y la conquista de puestos públicos, los asuman como compromisos programáticos socialmente vigilados.